

Salamanca, Guanajuato, a 08 ocho de enero de 2020 dos mil veinte, encontrándose debidamente integrado el expediente **JAM-86/2019**, promovido por **Santiago XXXXXXX**, por su propio derecho, en los siguientes términos;

RESULTANDO

PRIMERO. Promoción de la demanda. Por escrito presentado ante este Juzgado Administrativo Municipal el 12 doce de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, suscrito por quien se indica en el proemio de la presente resolución, impugnando los siguientes actos administrativos:

La boleta de infracción con número de folio 9270, la cual le fue notificada el 11 once de septiembre de 2019 dos mil diecinueve.

La calificación de la infracción, del 12 doce de septiembre de 2019 dos mil diecinueve referida en el punto anterior, en la que se determinó un crédito fiscal por la cantidad de \$5,069.00 (cinco mil sesenta y nueve pesos 00/100 en M.N.)

Además, solicito a) La declaración de nulidad de dicho acto, b) El reconocimiento de un derecho para obtener la devolución de la motocicleta que fue retenida en garantía del interés fiscal, así como la actualización que resulte de dicha cantidad c) La condena a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de los derechos violentados.

SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante auto de fecha de 18 dieciocho de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda y se ordenó correr traslado de ella a las autoridades demandadas y se le emplazo para que dieran contestación a la misma. Se tuvo por admitidas las pruebas documentales ofrecidas y exhibidas en su escrito inicial de demanda, así como la presuncional legal y humana en todo lo que le favorezca, se le tuvo por señalando autorizados legales y domicilio para recibir notificaciones, además manifestó que no consiente la publicación de sus datos personales.

Además se le otorgo la suspensión del acto impugnado, para efectos de que permanecieran las cosas en el estado en que se encuentran, hasta en tanto no se resolviera dicho proceso, toda vez que no causa perjuicio evidente al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, con fundamento en los artículos 268, 269 y 275 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TERCERO. Contestación de la demanda. Por auto de fecha 04 cuatro de diciembre de 2019 dos mil diecinueve se tuvo a el Oficial Calificador por contestando en tiempo y forma el proceso administrativo entablado en su contra, señalando domicilio procesal, nombrando autorizados legales y por admitidas las pruebas. Con respecto al agente vial, autoridad demandada, se le tuvo por no contestando en tiempo y forma por lo que se le tuvo por ciertos los hechos que se le imputan en el escrito inicial de demanda. Esto de conformidad con el artículo 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato.

Finalmente, se señaló fecha y hora para el desahogo de audiencia de alegatos.

CUARTO. Audiencia final del proceso. Legalmente citadas las partes, siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos de 10 diez de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, únicamente la parte actora los presento por escrito.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Este juzgado Administrativo Municipal con sede en Salamanca, Guanajuato, es competente para conocer y resolver el presente proceso, de conformidad con los artículos 1, fracción II y 263 párrafo primero del Código de Justicia Administrativa de Guanajuato; así como lo previsto por los artículos 241, 243 segundo párrafo, 244 y 246, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

SEGUNDO. Certeza del acto impugnado. La existencia se tiene por acreditado con la original de la boleta de infracción con número de folio 9270 –foja 10-, emitida el 11 septiembre de 2019 dos mil diecinueve administrada con la confesión realizada por la autoridad encausada al momento de contestar la demanda en cuanto expreso que era cierto la elaboración de la infracción impugnada.

Esta valoración se fundamenta en los artículos 48 fracción I y II 78,117,118, y 121 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

TERCERO. Las causales de improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y, por tanto, de estudio oficioso y preferente.

En esa tesitura se analizará la que hacen valer el Oficial Calificador, quien en síntesis expresan lo siguiente:

“...el actor carece de acción y de derecho, para promover el juicio y ejercitar las acciones de nulidad del acto impugnado, ya que la infracción con número de folio 9270 de fecha 11 de septiembre de 2019, se encuentra fundamentado y motivado...”

En cuanto al señalamiento que hace la autoridad respecto de la legalidad de su actuación y su percepción acerca de que por ello este proceso es improcedente, debe señalarse que la materia de controversia en este caso es precisamente la definición de la legalidad del acto combatido, razón por la que no puede traducirse en una causa de improcedencia o de sobreseimiento establecidas en los artículos 261 y 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, pues sus consideraciones se refieren a la legalidad del acto impugnado.

Dado lo anterior, debe desestimarse el planteamiento en cuestión, tal y como lo advierte la jurisprudencia número P./J. 135/2001, que dicta:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse”.¹

¹Tesis P./J. 135/2001, jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV de enero de 2002, página 5.

Dicho de otro modo, las alegaciones de la autoridad se refieren al estudio de la cuestión de fondo del asunto, razón por la que sus planteamientos no constituyen una de las causas antes señaladas y, por ende, es preciso desestimar su estudio en este apartado.

Por lo anteriormente expuesto y al no actualizarse alguna de las causales de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 261, en relación con el 262, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios del Guanajuato, **NO SE SOBRESEE EL PRESENTE PROCESO ADMINISTRATIVO.**

CUARTO. Se precisa a las partes que no se transcribirán íntegramente el concepto de impugnación expuesto por el accionante, ni los argumentos esgrimidos por la autoridad demandada. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a. /J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XXXI, de mayo de 2010 dos mil diez, consultable a página 830, que es del tenor literal siguiente:

«CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al

prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer».

QUINTO. En el concepto de impugnación donde se señala por la parte actora la competencia de la autoridad demandada cabe a bien señalar la siguiente jurisprudencia número XVI.1º.A.T.J/11, sustentada Por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a la Novena Época, Tomo XXIX, de junio de 2009 dos mil nueve, consultable a página 878, que es del tenor literal siguiente:

<<COMPETENCIA. LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA SENTENCIA, ES INDICATIVO DE QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONSIDERÓ OFICIOSAMENTE QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA ES COMPETENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL OCHO).El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, al analizar de oficio la competencia de la autoridad demandada, no se encuentra obligado a realizar un pronunciamiento expreso en la sentencia, cuando considera que la autoridad es competente, pues si bien, de conformidad con el artículo 302, fracción I y último párrafo, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el juzgador podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la falta de competencia de la autoridad para dictar el acto impugnado y la ausencia total de fundamentación o motivación en éste, ello no significa que el órgano jurisdiccional se encuentre facultado discrecionalmente para examinar ese tema cuando lo considere conveniente, pues la connotación sobre la importancia del aspecto de la "competencia" que se reconoce de ese estudio, orientan la conclusión de que el uso que le procuró el legislador al incluir el verbo "podrá", no es para identificar una facultad potestativa, sino una obligación para el resolutor de que siempre y en todos los casos se pondere la competencia de la autoridad que emite el acto o instruye el procedimiento porque es un aspecto que interesa a la comunidad. De ahí que, en el supuesto de que el citado

tribunal, al analizar oficiosamente la competencia de la autoridad administrativa considere que es incompetente, su pronunciamiento en ese sentido será indispensable, porque ello constituirá la causa de nulidad de la resolución impugnada; empero, si estima que es competente, no se encuentra obligado a plasmar esa consideración en la sentencia que emita, pues esa falta de pronunciamiento es indicativo de que el juzgador asumió que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución o acto impugnado en el juicio de nulidad, lo que se corrobora con la circunstancia de que continuó con el análisis de la procedencia del juicio y en su caso, entró al estudio de fondo de la controversia. >>

Quien resuelve considera **fundado** el **único** concepto de impugnación en donde la parte actora argumenta que el folio de infracción 9270, se emitió sin contener una debida fundamentación y motivación de conformidad con los siguientes razonamientos jurídico:

El artículo 137, fracción VI del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipio de Guanajuato, señala como elementos de validez del acto administrativo, la debida fundamentación y motivación.

En ese orden de ideas, tratándose de una boleta de infracción en materia de vialidad, la fundamentación debe traducirse en el señalamiento preciso de los preceptos legales aplicables al caso, mientras que, por motivar, debe entenderse como el señalamiento preciso y detallado de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el razonamiento jurídico donde se explique por qué esos hechos actualizan la hipótesis contenida en el Reglamento de Vialidad para el Municipio de Salamanca, Guanajuato.

Sirve de sustento al argumento vertido supralíneas, la siguiente Jurisprudencia, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, página 622, Tesis No. VI. 2º. J/31, que a la letra dice:

<<FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. >>

En la especie, la autoridad demandada señala con una “X” el motivo y fundamento de la supuesta infracción cometida por la impetrante, los cuales a la letra dicen:

“Agresión física al personal de la Dirección”.

“Agresión verbal al personal de la Dirección”.

“Circular en sentido contrario sobre las aceras”.

“Conducir sin casco protector el conductor de motocicleta o su acompañante”

“Conducir sin licencia o permiso vigente acorde al vehículo que conduce”

Lo anterior, si bien es cierto que se cita como fundamento el artículo 34, fracción V, IV Y 18 fracción VIII, artículo 38 fracción X,I, y artículo 32 fracción I, II, III, IV y

V (RVMS), del Reglamento de Vialidad del Municipio de Salamanca, Guanajuato, que a la letra dicen:

Retención de vehículo

“Artículo 18.- El personal operativo de la Dirección está facultado para interrumpir la circulación de un vehículo de motor y/o determinar la retención del mismo en los siguientes casos:

VIII. Cuando el conductor o algún tripulante se haya dado a la fuga del lugar en el vehículo o agreda física o verbalmente al personal de la Dirección.” (...)

“Artículo 34.- Queda prohibido a cualquier conductor y/o peatón:

IV. Proferir ofensas, amenazas y palabras altisonantes; y,

V. Agredir físicamente al personal de la Dirección. “ (...)

“ 38.- Son derechos y obligaciones de los motociclistas:

I.- En el caso de los motociclistas y sus acompañantes, usar casco de motociclista debidamente colocado y abrochado, que cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas NOM-115-STPS-1994, complementada con la siguiente NOM-017-STPS-1993;

X. No circular en sentido contrario o sobre las aceras; “ (...)

“Artículo 32.- El conductor de todo vehículo automotor deberá portar licencia de conducir vigente de acuerdo con el tipo de vehículo que conduzca en los términos que a continuación se describen:

I. Licencia tipo A: vehículos sedan y pick-up no mayor a 3.5 toneladas;

II.- Licencia tipo B: vehículos de transporte público y servicio de alquiler;

III.- Licencia tipo C: vehículos de transporte de carga de 4 toneladas en adelante;

IV.- Licencia tipo D: motocicleta; y,

V.- Permiso a menores de edad: solo tipo A y/o D”.

Así mismo en las circunstancias de tiempo y lugar lo siguiente: “13:10 horas- realizando vigilancia se detectó vehículo en circulación sobre la calle San Antonio en sentido Contrario al Marcarle el alto al ciudadano y solicitarle sus documentos Me agrede verbal y Físicamente el ciudadano y se retira corriendo hacia la calle Zaragoza Metiéndose a su Domicilio una **XXXXX** de color **XXXX** con número **XXXX** en la calle Zaragoza.” (sic) Sin embargo correspondía a la autoridad demandada ser más específico en cuanto a cómo había sido la falta cometida al reglamento de vialidad. Señala como fundamentación el artículo 38, fracción I, que no portaba casco protector, pero no describe el modo por el cual él se cercioro de dicha situación, señala que en sentido contrario, pero no menciona como se percató, señala que conducía sin permiso o licencia, ante esto tampoco detalla el procedimiento que se siguió para poder detener al conductor y solicitar la documentación tal y como lo señala el artículo 15 del Reglamento de Vialidad de Salamanca, Guanajuato que a la letra dicen:

>> Artículo 15.- En el caso de que los conductores contravengan alguna de las disposiciones de este Reglamento, el personal operativo de la Dirección, deberá proceder en la forma siguiente:

I. Indicar al conductor, en forma clara y evidente, utilizando el silbato, autoparlante manual, o verbalmente que debe interrumpir la marcha del vehículo y estacionarlo en algún lugar donde no obstaculice el tránsito;

II. Abordará al infractor, mostrando su identificación laboral, y haciéndole saber al conductor la infracción que ha cometido, de conformidad al reglamento vigente;

III. Solicitará respetuosamente al conductor que muestre su licencia de conducir, tarjeta de circulación, y en su caso, carta porte tratándose de vehículos de transporte pesado o con material peligroso; y,

IV. Una vez mostrados los documentos, levantará la boleta de infracción y entregará al infractor el ejemplar o ejemplares que corresponda.

Desde la identificación, hasta el levantamiento del acta de infracción, se deberá proceder sin interrupción.<<.

Ante tal determinación, era necesario que la autoridad demandada expusiera como fue que se percató que el hoy actor definitivamente había cometido una falta al Reglamento y cómo fue que dio, describir los hechos pormenorizados de como había ocurrido, así como el lugar exacto en el que se encontraba en cierto operativo pues el solo hecho de mencionarlo no da certeza de que se trata de un lugar así, pues se desconoce las características del lugar. Así pues el motivo de infracción debe describirse pormenorizadamente y obrar en el documento en que conste el acto impugnado, lo que en el caso concreto no ocurrió.

Ello es así porque, de los enunciados plasmados en la boleta de infracción, no se desprende razonamientos precisos que ilustren sobre el modo en que el agente se percató de que el actor cometió alguna infracción de tránsito, de modo tal que, relacionado con las normas de la materia, conduzcan a concluir que el conductor realmente infringió alguna disposición jurídica específica; siendo el caso que tal información debió contenerse en la boleta de infracción, lo que en la especie no ocurrió.

Por lo tanto, se concluye que la boleta de infracción no está debidamente fundada y motivada, pues los datos antes referidos no se localizan pormenorizadamente en el propio documento, lo cual resulta obligado según lo dispone la tesis jurisprudencial sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 139-144, Tercera Parte, página 201, con registro 237870, que por su analogía con lo aquí tratado, se cita a continuación:

>>FUNDAMENTACIÓ Y MOTIVACIÓ. DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCIÓ Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. Las autoridades responsables no cumplen con la obligaci3n constitucional de fundar y motivar debidamente las resoluciones que pronuncian, expresando las razones de hecho y las consideraciones legales en que se apoyan, cuando 3stas aparecen en documento distinto.<<

En efecto, correspondía a la demandada indicar mediante un relato pormenorizado de c3mo ocurrieron los hechos, para acreditar en el texto mismo del acto controvertido, asimismo como lo señaala el Reglamento de Vialidad para el municipio de Salamanca, Guanajuato.

“Artículo 16.- El personal de la Direcci3n elaborará la boleta de infracci3n correspondiente despu3s de haber presenciado los hechos que actualizan el supuesto jur3dico, por haber tenido conocimiento de estos y se asentarán en formato oficial foliado impreso con datos de identificaci3n de la Direcci3n, los siguientes requisitos: (...)

Fecha, hora y lugar en que se cometió la infracci3n;

VIII. Motivaci3n: descripci3n de los actos con

Constitutivos de la infracci3n cometida; y,”(...)

Así mismo señaala que el actor lo agrede física y verbalmente, señaalado en el apartado de “OBSERVACIONES” que se realizó un reporte y se realizó un certificado médico” documento que no se describe en cuanto a los resultados del mismo, pues el solo hecho de mencionarlo no da una certeza de que se allá realizado, además omitió mencionar en que consistieron este tipo de agresiones.

Sin embargo, lo señalado por el agente vial no conduce a concluir un adecuado señalamiento de motivos aunado a una breve relación de los hechos, ni tampoco se demuestra la existencia de una debida y clara motivación de cómo se percató que el hoy actor cometió la supuesta infracción.

Sirve de sustento al anterior razonamiento, por analogía, el Criterio emitido por la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato, publicado en el boletín de Criterios 2000-2007, página 222, y que a la letra dice:

“MOTIVACIÓN DE UNA INFRACCIÓN DE TRÁNSITO, REQUISITOS QUE DEBE REUNIR PARA ACREDITAR UNA AGRESIÓN VERBAL. Para acreditar la materialización de la agresión verbal a un Oficial prevista por el artículo 187, fracción III del Reglamento de Tránsito de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, es necesario que en la boleta de infracción se señalen las circunstancias de hecho, como qué Oficial recibió la agresión y en qué consistió ésta, para que ella contenga una debida fundamentación.”

En estos términos, para que la motivación sea suficiente y congruente, es necesario que en el propio cuerpo de la infracción se señalen en forma completa, las razones que sustenten su dicho y de las que pueda acreditarse la comisión de la totalidad de conductas imputadas. Se concluye por ello, que la motivación empleada, resulta insuficiente.

Por todo lo anterior, para efecto de que pudiera subsistir la presunción de legalidad de la que se encuentran investidos los actos administrativos, resulta necesario que la autoridad sujete su actuar a las formalidades contenidas en el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; para el presente asunto, particularmente haber motivado en forma suficiente, la totalidad de las circunstancias que acreditaran fehacientemente la comisión de las conductas imputadas.

A mayor abundamiento, cabe puntualizar que la fundamentación y motivación de la boleta de infracción debe contener, como se esclareció supralíneas, los siguientes elementos: a) preceptos legales aplicables; b) relato pormenorizado de los hechos, incluyendo elementos temporales, espaciales y circunstanciales; y, c) argumentación lógica jurídica que explique con claridad la razón por la cual los preceptos de ley tienen aplicación al caso concreto.

Lo anterior así se sostiene, pues limitarse a realizar las anotaciones como las que invoco la autoridad, sin una debida fundamentación y motivación, puede dar como resultado que un agente vial arbitrariamente elabore infracciones imponerle la carga de efectuar un pago injustamente habría tenido que soportar, así como imputarle cualquier conducta sin detallar el sustento jurídico en que soporte su decisión.

No es óbice para arribar a esta conclusión el hecho de que la autoridad demandada al momento de su contestación en lo medular negó que la boleta de infracción 9270 se encontrara indebidamente fundada y motivada; y refiere que existe una contradicción entre lo señalado por el actor y el material probatorio, a su juicio existen elementos tendientes a evidenciar la legalidad de la conducta reprochada y que la negación lisa y llana hecha por el recurrente debe considerarse como calificada.

El argumento sostenido por la autoridad en cuanto a que nos encontramos en presencia de una negación que envuelve una afirmación **es infundado** atento a lo siguiente:

El artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que los actos administrativos se presumirán legales, sin embargo, las autoridades administrativas deberán probar los hechos en que los motiven cuando **el interesado los niegue lisa y llanamente**, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.

Dentro del escrito de demanda <<foja 06>> capítulo de conceptos de impugnación, el justiciable de una forma clara y sin cortapisas negó lisa y llanamente, por lo que, la presunción de legalidad del acto deja de operar revirtiendo a de esta manera a la demandada la carga de la prueba a fin de demostrar la existencia de los hechos y, por tanto, **la legalidad del acto administrativo**, situación que dentro del presente proceso no se acredita, pues del análisis de la boleta de infracción 9270 resulta indebidamente fundada y motivada atento a los argumentos antes expuestos en esta resolución.

Es importante señalar que dentro del presente proceso administrativo se ventila sobre la legalidad o ilegalidad del folio de infracción 9270, de esta manera, por regla general le corresponde a la autoridad emisora del acto impugnado acreditar que el mismo cumplía con todos los elementos y requisitos de validez regulados por los artículos 137 y 138 Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Bajo ese contexto, la omisión o irregularidad de alguno de los elementos de validez trae como sanción la nulidad del acto administrativo, mismo que no podrá ser remplazado por otro, tampoco subsanarse y por tanto, el impetrante no tiene la obligación de cumplirlo.

En consecuencia, las agravios esgrimidos por el actor resultan fundados referente a la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, en atención a que es en el propio acto donde de forma completa deban señalarse el ordenamiento legal aplicable y las razones y circunstancias pormenorizadas bajo las cuales se cometió una falta administrativa, lo anterior con fundamento en la fracción VI del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Como apoyo de lo anterior, se hace propio, el criterio que sostiene la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, contenida en la página 119 ciento diecinueve, de la publicación intitulada "Criterios 2000-2008" del referido Tribunal, la cual es del tenor siguiente:

“INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- PROCEDE DECRETAR LA NULIDAD LISA Y LLANA.- La ausencia de fundamentación y motivación deriva en el decretamiento de una nulidad para el efecto de que se emita otro acto debidamente

Fundado y motivado. Por su parte la indebida satisfacción de estos extremos, conduce a decretar una nulidad lisa y llana, ya que aquí el particular no requiere conocer los fundamentos y motivos de la afectación, sino que es sabedor de que los aplicados en el acto en concreto no son los adecuados.²”

En las relatadas circunstancias, es de concluirse que del contenido del acto combatido no se advierten elementos suficientes que demuestren que el hoy actor haya infringido algún ordenamiento legal.

Lo anterior encuentra sustento legal en la siguiente tesis:

“TRANSITO, MULTAS DE. Una infracción y una multa impuestas por el agente de tránsito como parte, testigo y Juez, en cuya acta se limita a asentar escuetamente "pasar alto con señal de semáforo", carece de motivación en realidad, pues por una parte no explica en forma clara y completa las circunstancias de la infracción y, por otra, sería una denegación de justicia y una renuncia al debido proceso legal, contra el texto de los artículos 14 y 16 constitucionales, obligar a un particular a pagar sin más una multa cuya motivación

²(Exp. 4.509/02. Sentencia de fecha 09 nueve de mayo de 2003. Actor: Martha Isabel Espriu Manrique)

no es clara y en la que, como se dijo, el agente fue parte, testigo y Juez, sin que su dicho admita prueba eficaz y real (no simplemente teórica) en contrario.³

Por las consideraciones vertidas, con fundamento en los artículos 143 párrafo primero, 300 fracción II y 302 fracciones II y IV, del multicitado Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, lo procedente decretar la **NULIDAD TOTAL** del acto impugnado consistente en boleta de infracción **9270**, elaborada por **XXXXX**, agente vial, adscrito a la Dirección de Vialidad de Salamanca, Guanajuato.

Asimismo, es procedente decretar la nulidad total de la calificación de boleta anulado, esto por ser producto de un acto viciado de origen y, por ende, no puede subsistir sin aquella que le dio origen.

Esta determinación se sustenta en el artículo 300 fracción II del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 121-126 sexta parte; pagina 280, Séptima Época, con registro número 252103, que esta establece:

“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal.” -----

³Tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 121-126, Sexta Parte, página 233. Con registro número 252071

SEXTO. Dentro del escrito inicial de demanda el ahora actor solicito como reconocimiento de derecho lo siguiente:

- a) El reconocimiento de derecho para que le sea devuelta la motocicleta misma que se le fue retirada en garantía por concepto de la multa que aparejo el acto impugnado. O en su caso la devolución de la cantidad que en su momento tenga que erogar.

- b) El derecho para que la autoridad se abstenga de hacer cualquier tipo de registro de carácter negativo o perjudicial, o bien si ya se realizó se proceda a su cancelación dentro del libro de sanciones administrativas del municipio de Salamanca, Guanajuato.

En cuanto al inciso a) ha lugar al reconocimiento del derecho para que le sea devuelta la motocicleta acreditando la posesión de la misma en anexo -foja 11- carta factura a nombre de Santiago Javier **XXXXXXXX** que tuvo que ser retirada como garantía por concepto de multa. Al quedar sin efectos la boleta de infracción, en cuanto a la calificación del acto impugnado por la cantidad \$5,069 (cinco mil sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.) al ser un acto viciado derivado del principal, queda sin efectos el realizar el cobro.

Por lo que respecta a la no inscripción y/o cancelación de los antecedentes administrativos, **ha lugar al reconocimiento** del derecho, en atención a los siguientes argumentos:

Toda actuación policial se asienta en documentos oficiales para su debido registro en las plataformas destinado para ellos, tal y como se desprende del artículo 40, fracción IX de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y lo correlativo al numeral 85 de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato, que a la letra establecen:

De la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De las obligaciones y sanciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

<< **Artículo 40.-** Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables.

De la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato.

Colaboración en materia de registro de antecedentes de +tránsito

Artículo 85. Con la finalidad de contar con información oportuna y suficiente para prevenir accidentes de tránsito, así como para detectar a los infractores reincidentes, la Policía Estatal de Caminos, y los municipios, se apoyarán en el registro estatal de antecedentes de tránsito...>>

Por ende, una vez que ha quedado anulada la boleta de infracción y el total de su contenido, SE RECONOCE EL DERECHO DE LA PARTE ACTORA, a que la autoridad demandada se abstenga de realizar o colaborar en la inscripción de antecedentes de tránsito y en el supuesto de haberse inscrito la sanción materia del presente juicio, PROCEDA A SU CANCELACION TODA VEZ QUE HA QUEDADO ANULADA CON MOTIVO DE LA PRESENTE SENTENCIA.

En esa tesitura y derivado de los argumentos esgrimidos por esta juzgadora, **se condena a la autoridad demandada (agente)** a realizar las gestiones necesarias a fin de que realice al actor, la devolución de la motocicleta retenida y la abstención de realizar el cobro, por concepto de multa, lo anterior con la finalidad de no imponer cargas al actor para el cumplimiento de la presente sentencia.

Debiendo adoptar la autoridad demanda todas las medidas que sean necesarias para el pleno restablecimiento del derecho reconocido, pudiendo auxiliarse de otras autoridades para el cabal cumplimiento de esta sentencia.

Encuentra aplicación por analogía al caso concreto, el criterio expedido por el H. Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, del rubro y texto siguientes:

«DEVOLUCIÓN DEL PAGO DE LO INDEBIDO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD DE LA QUE EMANÓ EL ACTO ANULADO REALIZAR LAS GESTIONES PARA.- Si el actor ocurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado a efecto de solicitar el reembolso del pago que realizó, por considerar que la infracción del que provino era ilegal, resulta correcto que el A quo condenara a su devolución a la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado, y no a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, pues el acto de autoridad (imposición y calificación de la infracción), por el cual el actor enteró esa cantidad al erario estatal, fue emitido por el titular de esa Dirección, no así la mencionada Secretaría, la que, en todo caso, se limitó

a cumplir con su cometido de recaudar los ingresos estatales, como dispone el artículo 5º del Código Fiscal del Estado, por lo que corresponde a esa Dirección General de Tránsito y Transporte, realizar las gestiones necesarias para que quede sin efectos el pago realizado a la autoridad recaudadora y se devuelva al actor la cantidad cuyo acto de origen fue declarado ilegal.⁴>>

En base a lo antes expuesto, la autoridad deberá informar sobre el cumplimiento otorgado al presente considerando, **en un término de quince días hábiles** contados a partir de aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Este Juzgado Administrativo Municipal resulto competente para conocer y resolver el presente proceso administrativo, atento a lo dispuesto por el considerando primero de esta sentencia.

SEGUNDO. **No se sobresee** el proceso, de acuerdo con lo asentado en el CONSIDERANDO TERCERO de este fallo.

TERCERO. Se declara la **NULIDAD TOTAL** de la boleta de infracción **9270**, en los términos de lo manifestado en los CONSIDERANDO **QUINTO**.

⁴(Toca 136/07. Recurso de Revisión interpuesto por Daniel García Razo, en su carácter de autorizado del Director General de Tránsito y Transporte del Estado. Resolución de fecha 9 de enero de 2008)."

TERCERO. Ha lugar al **RECONOCIMIENTO DEL DERECHO** de la parte actora, Y **A LA CONDENA** de las pretensiones declaradas procedentes, en los términos manifestados en el **CONSIDERANDO SEXTO.**

NOTIFÍQUESE. En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y dese de baja del Libro de Registro de este órgano de control de legalidad.

Así lo resolvió y firma la Licenciada **Estephania Núñez Diosdado**, encargada de despacho del Juzgado Administrativo Municipal de Salamanca, Guanajuato, quien actúa asistido en forma legal con Secretaria de Estudio y Cuenta, Licenciada **Leslie Haydeé Leticia Valadez Dávalos**, quien da fe.